

DIMENSIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: ANOTACIONES TEÓRICAS Y EMPÍRICAS¹

Alexandra Guáqueta²

Ante la correlación existente entre los diagnósticos interpretativos sobre el conflicto armado y la formulación de políticas o rutas legales para su resolución, este artículo expone una nueva agenda académica desde la cual las dinámicas individuales y colectivas de apropiación de recursos y viabilidad económica suponen un redimensionamiento de la conceptualización y resolución de los conflictos. El énfasis en las funciones económicas racionales de los actores del conflicto son un aporte al debate teórico a partir de la introducción de nuevas herramientas analíticas.

Palabras claves: conflicto armado colombiano/ nueva agenda académica/ viabilidad económica/ racionalidad.

Given the correlation between conceptual interpretations of armed conflict and the formulation of policies or legal routes for its resolution, this article explores a new academic agenda in which individual and collective dynamics of resource appropriation and economic viability lead to the reconceptualization of conflict and its resolution. In this sense, the rational economic functions of actors in conflict constitute an important contribution to the theoretical debate in that they introduce new analytical tools.

Keywords: Colombian armed conflict/new academic agenda/ rational economic functions.

INTRODUCCIÓN

Los conflictos internos, muchos de ellos denominados guerras civiles por su intensidad y por involucrar a las fuerzas estatales de seguridad como actores, han sido materia de estudios predominantemente sociológicos y politológicos. Bajo los lentes analíticos de estas disciplinas se han estudiado los orígenes políticos de conflictos tales como la ex-

clusión política e ideológica, la resistencia al autoritarismo, la rebelión marxista o la extensión de la competencia entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética durante la Guerra Fría. También se han estudiado algunos de los aspectos socio-económicos que han jalonado a los movimientos sociales de protesta que algunas veces se transforman en conflictos armados, como la discriminación de clase y el subdesarrollo. Y, por últi-

1 Trabajo presentado el 16 de agosto de 2002 en el seminario: La economía política del conflicto colombiano, organizado por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Es fruto de mi vinculación al programa de investigación Agenda económica en las guerras civiles, del International Peace Academy en Nueva York -IPA (2001-2002). Recibido: 02/19/003 - Aprobado: 04/02/003.

2 Doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford.

mo, los estudios sobre conflictos armados se han enfocado en sus dimensiones estratégico-militares (Holsti, 1996).

Por lo general, esta literatura ha argumentado que muchos de estos conflictos estuvieron enmarcados dentro de la confrontación fría entre el Occidente capitalista y el Oriente marxista, una pugna que se volvió caliente en los espacios de combate del Tercer Mundo. E indudablemente fue así, como se verá en las siguientes situaciones y ejemplos: conflictos internos (en Angola, Afganistán, Nicaragua y Mozambique), guerras interestatales (Irán contra Irak) y dictaduras rapaces (la de Mobutu en Zaire) se alimentaron con fondos y apoyo político de las dos superpotencias. Por ello, con el fin de la Guerra Fría y las olas de democratización política y liberalización económica mundial a partir de los noventa, académicos y políticos de Occidente auguraron paz internacional y doméstica. Pero contrario a sus expectativas, nuevas confrontaciones aparecieron en el mapa y algunas viejas guerras civiles se reciclaron dentro de la globalización y se intensificaron, como es el caso de Colombia. ¿Qué origina esta nueva generación de conflictos internos si ya las pugnas ideológicas entre capitalismo y marxismo, y entre democracia y autoritarismo habían quedado resueltas con el fin de la Guerra Fría, y si los apoyos militares de Estados Unidos y la ex Unión Soviética disminuyeron?

Son estos interrogantes los que han ayudado a formar la nueva agenda de investigación de la economía política de los conflictos internos, la cual se enfoca en algunas de las dimensiones económicas, especialmente las dinámicas individuales y colectivas de apropiación de recursos y la viabilidad económica para hacer la guerra. Este artículo tiene por objeto describir dicha nueva agen-

da académica, discutir su relevancia en el análisis del conflicto colombiano y evaluar cómo éste contribuye al debate teórico.

LA NUEVA AGENDA ACADÉMICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LOS CONFLICTOS INTERNOS

La desintegración de Yugoslavia en 1992 y el genocidio de 1994 en Rwanda sugirieron que los nuevos conflictos internos se originaban en pugnas entre identidades étnicas y religiosas, que habían sido mediadas y aplacadas por regímenes autoritarios durante la Guerra Fría. Este contexto y este diagnóstico concientizaron la comunidad internacional acerca de la prevalencia de las diferencias étnicas y la heterogeneidad cultural a pesar de los procesos homogeneizantes de la Guerra Fría y la globalización (Ignatieff, 1993; Kaplan, 1993). Pero pronto esta lectura de los conflictos armados fue criticada tanto por razones empíricas como por razones prescriptivas. Por un lado, se hizo evidente que los factores económicos habían sido tan determinantes como los étnicos en la definición del contorno de muchos conflictos, incluyendo el de la ex Yugoslavia (Kaldor, 1999). Era imposible dar cuenta de ciertas guerras como la de Sierra Leona, sin analizar el tráfico ilegal de diamantes, o de la dinámica entre el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita) sin incluir la economía del petróleo y el mercado internacional de diamantes en el análisis. O, en el caso de Colombia, explicar muchas de las estrategias y tácticas militares de la guerrilla y los paramilitares sin tener en cuenta la industria de drogas ilícitas y las prácticas extorsivas generalizadas. Además, las micro-dinámicas en otras guerras mostraban la constante reformulación de

alianzas que obviaban las barreras étnico-religiosas. Por otro lado, la interpretación étnico-céntrica de los conflictos era esencialmente pesimista, auguraba la imposibilidad de convivencia pluricultural, y no proporcionaba sugerencias prácticas a los formuladores de políticas sobre cómo evitar y resolver conflictos que fueran distintos a la separación total de comunidades diferentes (Keen, 200:20,21).

Es así como se llegó a una lectura de los conflictos internos desde una óptica en la que han convergido variables políticas, la racionalidad económica y la motivación del saqueo de recursos como fuerzas constitutivas de las guerras civiles (Berdal y Malone, 2000)³. La consideración de variables económicas suscitó la formulación de una serie de preguntas e hipótesis acerca de los tipos de actividades económicas que impactan el origen y duración de las guerras. Éstas se pueden agrupar en, al menos, tres grandes ejes temáticos⁴.

Racionalidad y motivaciones de los combatientes

Parafraseando a Cari Von Clausewitz, David Keen, por ejemplo, se refirió a la guerra como "la continuación de fines económicos por otros medios" (Keen, 1998: 11) y argumentó

que las guerras, en lugar de ser episodios de caos, tenían funciones económicas racionales a nivel individual, como el lucro. Este tipo de afirmaciones llevó a formular preguntas acerca de los móviles de los combatientes: si los rebeldes, bien sea la élite de los grupos o los combatientes razos, eran tan solo ladrones armados y organizados movidos por el deseo de enriquecerse, o si sus acciones estaban más bien basadas en agravios reales que explicaban su opción por la lucha armada. Después de Keen, sin duda alguna, el artículo que más controversia causó y que le dio vida a este debate a partir de 1999, fue "Greed and Grievance in Civil War" (Collier, 2000), escrito por el director de investigaciones del Banco Mundial, Paul Collier, y por su colega Anke Hoeffler, basado en un estudio econométrico de más de sesenta episodios de guerras civiles. Con tono desafiante, Collier y Hoeffler argumentaron que las guerras civiles estaban más relacionadas con rebeldes y mercenarios avaros que con genuinas protestas contra el autoritarismo y la desigualdad. Collier llevaba décadas trabajando en temas de desarrollo económico y estaba convencido de que unos de los impedimentos más grandes del continente africano para salir adelante en términos socioeconómicos eran individuos avaros y explotadores, y gobernantes corruptos que se valían de quasi-ejércitos para engordar sus cuentas en paraísos fiscales (el caso de Char-

3 En términos generales, la economía política busca analizar las relaciones de poder que inciden en la distribución de riqueza en una sociedad o un estado-nación. Tradicionalmente, los análisis se han valido de la filosofía, la ciencia política, la economía, la historia y la sociología. Los nuevos análisis de la economía política de los conflictos, liderados entre otros por el Banco Mundial, se han caracterizado por usar modelos econométricos, los cuales están basados en ideas clásicas de la decisión racional. Es justamente este abordaje cuantitativo el que ha suscitado grandes críticas y llevado a complementar y hasta revisar dichos estudios por medio de análisis más bien cualitativos.

4 La nueva literatura sobre conflictos armados ha crecido aceleradamente en los últimos cinco años y este artículo no pretende ser una revisión bibliográfica exhaustiva sino abordar algunos de los temas de investigación e hipótesis más relevantes y controversiales.

5 Algunas críticas estaban dirigidas a la elección y construcción de los indicadores usados en las regresiones, otras al

les Taylor, el presidente de Liberia; de Joñas Savimbi, el líder de Unita en Angola; o de Foday Sankoh, el líder del Frente Revolucionario Unido, en Sierra Leone). Una maniobra retórica de los autores para resaltar las dimensiones económicas de los conflictos en lugar de las políticas fue tildar a los objetivos políticos como "motivaciones" y a los móviles económicos como "racionalidad" -una categoría aparentemente más "objetiva" y asociada con metodologías "duras" de la economía, en lugar de las herramientas analíticas "blandas" de la ciencia política y la sociología-. Collier y Hoeffler recibieron muchas críticas⁵ que los obligaron a refinar su estudio y sobre todo a cambiar el lenguaje de sus interpretaciones. En la segunda versión de *Greed and Grievance* (octubre del 2001), sin embargo, los autores se refirieron a motivaciones (que podían ser políticas o económicas) y a "oportunidades económicas" para no descalificar la legitimidad de las motivaciones políticas o desconocer su existencia empírica, y argumentaron que las motivaciones poco importaban pero que las oportunidades para realizarlas eran definitivas (Gates, 2002)⁶. Así, las oportunidades económicas determinaban el grado de riesgo de

tener y sostener un conflicto armado. Para ser claros en este punto, las motivaciones se refieren más a un fin y la racionalidad a la forma como se toman las decisiones para alcanzar dicho fin⁷.

No obstante las críticas y las confusiones que se generaron entre los conceptos de "racionalidad" y "motivaciones", dicho estudio puso sobre la mesa un punto fundamental sobre las guerras civiles que nadie podía negar. Para que una rebelión fuera exitosa, o para que una guerra durara, se necesitaban recursos económicos. Se resaltó el tema de la financiación de las guerras, que a su vez ha venido generando estudios innovadores acerca del papel de funcionarios corruptos, del sistema financiero internacional, y de las empresas privadas productivas y extractivas en la economía de las guerras.

La financiación de los conflictos armados

Los sistemas de financiación de las guerras constituyen el segundo eje temático. La idea detrás de este tema es que un grupo combatiente puede carecer de recursos políticos o

hecho de que el estudio prácticamente deslegitimaba a la rebelión como una opción militar-política aceptable para lograr cambios estructurales de fondo de una sociedad. En la historia moderna, las revoluciones y los movimientos clandestinos de resistencia habían sido fundamentales para cimentar en el desarrollo de la democracia (por ejemplo, el caso de Europa Occidental y la oposición a los regímenes fascistas).

- 6 Recientemente han surgido estudios que también usan modelos econométricos, pero que buscan evaluar el peso relativo de variables diferentes a las económicas. Uno muy interesante y relevante para el caso de Colombia es el de Scott Gates que destaca a la geografía y a la capacidad de reclutamiento y castigo de los líderes combatientes como factores que determinan el éxito de un actor armado bien sea legal o ilegal.
- 7 Adicionalmente, el debate sobre "racionalidad" también se refiere a la metodología en ciencias sociales usada para abordar la pregunta. En términos generales la literatura ha identificado a un lado del espectro a los racionalistas-individualistas, asociados con el uso de estadísticas y regresiones econométricas, (muchas veces falsamente) contrapuestos a los holistas, asociados con estudios históricos y ricos en descripción.
- 8 No he incluido a la apropiación forzada de tierras como una actividad puramente económica generadora de rentas que luego se invierten en las guerras, ya que la apropiación de tierras está íntimamente ligada con el control político y estratégico de las comunidades que las habitan o que las desalojan.
- 9 La facilidad con la que personas con mano de obra no calificada se apropian de los recursos.

de bases ideológicas bien cimentadas, no obstante, si tiene músculos económicos y militares podrá seguir sosteniéndose en la guerra. Es decir, la disponibilidad de dinero explica la duración y posiblemente la intensificación de los conflictos armados. Ya pueden vislumbrarse patrones comunes en la financiación de las guerras con base en los nuevos estudios que se han enfocado en este punto. Los grupos rebeldes tienden a depender principalmente de:

- a) el control y la explotación ilegales de los recursos naturales legales, los cuales son comercializados en mercados locales e internacionales⁸;
- b) el cobro ilegal de impuestos, o el control de mercados ilegales con altos márgenes de ganancia, tal como la cocaína, la heroína y el cannabis;
- c) el control local y regional de la economía subterránea por medio de la producción y el tráfico ilegal de bienes de consumo o de servicios legales, robo, extorsión y secuestro; y
- d) la movilización de las diásporas para obtener donaciones voluntarias o para extorpiarlas por medio de la extorsión.

Vale la pena añadir que la viabilidad económica de las guerras se materializa sólo cuando los rebeldes pueden traducir el dinero en capacidad militar y poder de intimidación, lo que llamo el factor de "fungibilidad" (Guáqueta, 2002). Es decir, los grupos armados ilegales deben tener la capacidad de generar ingresos, de esconderlos, de accederlos y de utilizarlos para vestir, dar de comer, armar y equipar a los combatientes, y para reclutar a más combatientes; todo esto

con un nivel relativo de impunidad. En otras palabras, la viabilidad económica es en parte función de las estructuras de oportunidad legales y policivas que le permiten a los combatientes acceder a recursos sin incurrir en mayores costos. Por esto, la ineficiencia, los vacíos legales y las debilidades administrativas de los estados a nivel nacional y local ayudan a prolongar las guerras. La ausencia del control estatal sobre la producción económica en zonas de conflicto le permite a los grupos armados desarrollar sus actividades económicas para financiar las guerras. La corrupción es igualmente perjudicial, pues oficiales del sector público comprometen la aplicación de las leyes y las políticas nacionales de seguridad al transar con grupos rebeldes (por ejemplo, por medio del desvío de armas), o al enfocarse exclusivamente en los sobornos que puedan aceptar. En épocas de guerra el sector de defensa del estado tiende a estar más expuesto a actos de corrupción debido al incremento del presupuesto destinado a defensa y a las facultades especiales que adquieren las fuerzas de seguridad, las cuales los eximen de los controles rutinarios practicados por las ramas legislativa y judicial.

Vale la pena notar que la viabilidad económica de los rebeldes representa tan solo una cara de la moneda. Igualmente indispensable es el que los combatientes legales, es decir, las fuerzas de seguridad del estado, tengan sostenibilidad económica para no perder la guerra. Por su lado, dependen principalmente de impuestos, asistencia extranjera de otros países, regalías de recursos naturales, inversión extranjera, y en algunos

10 Rangel (2000) parece apoyar este argumento en su artículo sobre las finanzas de la guerrilla. Nazih Richani (2002), que adolece de algunas fallas conceptuales y metodológicas, trata de apartarse de los análisis que miran primordialmente los intereses e incentivos económicos de los combatientes ilegales con el fin de demostrar que la duración del

casos extremos, de la ayuda directa de las fuerzas de seguridad de estados aliados. Si la capacidad de las fuerzas de seguridad del estado es decididamente superior a la de los rebeldes es posible terminar el conflicto por medio de un triunfo militar (independientemente de que este modo de terminar la guerra sea deseable o no, por ejemplo comparado con un proceso de paz). Lo único que esto indica es que las guerras duran cuando todas las partes gozan de poder económico para sostenerse, pero no lo suficiente para ganar la guerra. Por este motivo, los conflictos pueden terminarse bien sea inyectando grandes capitales a uno de los lados o cortando los recursos de uno o ambos lados. Algunas veces, la sola reducción del tamaño de la guerra (intensidad letal y dispersión geográfica) es deseable en términos humanitarios, así no se logre poner fin al conflicto en el corto plazo.

Recursos naturales y conflicto armado

El tercer eje temático se refiere al impacto de los recursos naturales en las guerras civiles. Una de las primeras preguntas que se formularon era si el origen de las guerras podía explicarse como peleas por el control de las rentas generadas por la explotación de recursos naturales (Herbst, 2000: 270). También se formularon hipótesis con respecto a la relación entre existencia o abundancia de recursos naturales y la duración, no sólo el origen, de las guerras. Esta relación se planteó con base en los ciclos económicos que venían presentándose en algunos conflictos, por ejemplo, en África: una vez activado el conflicto, la inversión nacional y extranjera en manufacturas e industria con componentes tecnológicos decrecía debido a la incertidumbre de las condiciones legales, a la destrucción de infraestructura (de vías, fábricas,

almacenes), a las condiciones de violencia e inseguridad y al incremento de la inversión estatal en defensa, comparado con actividades económicas productivas. Así, la explotación de recursos naturales era una de las pocas actividades económicas productivas disponibles tanto para la población como para el estado y los rebeldes. También se veía que esta dinámica casi siempre iba de la mano de casos de corrupción pública y privada, ya que en tiempos de guerra, y tratándose de administraciones débiles, era poca la vigilancia que se ejercía sobre el manejo de los recursos naturales.

Como parte fundamental de su estudio, Collier y Hoeffler también concluyeron que los países cuyas exportaciones estuvieran compuestas en un 32% por productos primarios estaban más expuestos a la incidencia de conflictos armados. Según ellos, el mecanismo detrás de esta correlación era la facilidad con la cual grupos rebeldes podían explotar los recursos naturales, a diferencia de otros bienes como manufacturas o industrias con componente tecnológico (Collier y Hoeffler, 2000). Así, entre más recursos naturales disponibles mayores posibilidades de financiación de las guerras. Para despejar las dudas sobre los casos de países industrializados, políticamente estables y pacíficos que también tenían abundancia de recursos naturales, los autores asumieron que estos países tenían acceso a grandes cantidades de divisas, las cuales podían canalizar eficientemente para el robustecimiento de la gobernabilidad y la capacidad de defensa del estado, razón por la cual las iniciativas rebeldes no se daban o fracasaban, a diferencia de lo que ocurría en los países menos desarrollados con administraciones débiles. La hipótesis de Collier y Hoeffler hizo realmente poco por esclarecer cómo y por qué es, aparentemente, tan frecuente la relación

entre actividades extractivas y guerras civiles, pero sirvió para generar nuevas ideas en el área.

Michael Ross recogió la idea del grado de "saqueabilidad" (Ross, 2001)⁹ (*"lootability"*) y elaboró un estudio preliminar para determinar si todos los recursos naturales tenían los mismos efectos con respecto a las guerras civiles. Ross formuló los siguientes planteamientos: a) hay recursos que pueden ser menos (petróleo) o más (diamantes y drogas) saqueables, dependiendo de sus cualidades físicas; b) los recursos menos saqueables engrasan las arcas del estado mientras que los más saqueables están ligados a la economía de los rebeldes; c) entre más saqueable el recurso mayores son los problemas de disciplina al interior de los grupos armados; y, d) las disputas por recursos no saqueables tienden a generar conflictos separatistas (Ross, 2001). El estudio de Ross ha sido útil porque desempaca algunas de las mecánicas específicas detrás de la correlación entre recursos naturales y conflicto. Además, con respecto a la hipótesis de Collier y Hoeffler, Ross señaló que las primeras estadísticas de *Greed and Grievance* no incluían aquellos recursos que claramente aparecían ligados a conflictos internos, como la coca, la amapola y los diamantes. Esta anotación de Ross, al igual que un reciente estudio de IPA (Guáqueta, 2003), hacen evidente que hay dimensiones económicas estructurales que parecen haber quedado relegadas a un segundo plano en la nueva agenda académica de los conflictos internos, tales como la pobreza y la inequidad, que usualmente van de la mano con una escasa capacidad gubernamental para satisfacer las necesidades bá-

sicas y de seguridad de los ciudadanos. Es posible que la correlación entre dependencia de la exportación de recursos naturales y conflicto que encontraron Collier y Hoeffler sea un indicio de que existe una correlación directa entre subdesarrollo económico y conflicto. Esto explicaría por qué, por ejemplo, la mayoría de los conflictos internos están ubicados en países en vía de desarrollo, en lugar de países industrializados. Determinar en qué medida existe una correlación entre bienestar socioeconómico y participación política y conflicto armado ha generado álgidos debates en círculos académicos, tecnócratas y políticos en Colombia (Gutiérrez Sanín, 2001) y a nivel internacional (Lichbach, 1989: 431-471; Stewart, 2002). A pesar de que no hay un consenso sólido sobre el tema, parece haber acuerdo internacional sobre la interrelación entre la precariedad de ciertas condiciones socioeconómicas (la falta de educación, bajos ingresos, inequidad horizontal) que incrementan la posibilidad de que surjan, se alarguen o intensifiquen los conflictos armados.

APLICACIONES EN EL ANÁLISIS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO Y APORTES AL DEBATE TEÓRICO

La nueva agenda académica sobre los conflictos armados ya ha influenciado la manera como se analiza el conflicto colombiano. Esto es de vital importancia ya que los diagnósticos moldean y hasta determinan la formulación de políticas. Es decir, la forma como se lee y explica el conflicto colombiano dibuja el mapa de rutas políticas y legales a seguir para abordarlo, la estrategia de

conflicto colombiano beneficia a la élite. No obstante, Richani termina argumentando que la duración del conflicto

seguridad nacional y la situación de los grupos armados ilegales.

Una de las innovaciones en la forma de analizar el conflicto colombiano ha sido enfocarse en sus fuentes de financiación y explicar su duración, transformación e intensificación en los últimos quince años gracias a las constantes y abundantes fuentes de dinero y armas (Klare y Andersen, 1996) que han nutrido principalmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a los paramilitares¹⁰. Antes de discutir las implicaciones prácticas y políticas de este enfoque, se analizan a continuación los recursos de los grupos armados ilegales en Colombia, contrastando esta evidencia empírica con las preguntas e hipótesis analizadas en la sección anterior de este ensayo.

Las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales

En Colombia, las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales han sido diversas y no se han limitado simplemente a la apropiación directa y violenta de recursos naturales que tanto ha caracterizado a otras guerras civiles. Las actividades para recaudar fondos incluyen desde la prestación de servicios de seguridad, el cobro de "impuestos" y la participación en la industria de dro-

gas ilícitas, la extorsión a individuos y empresas privadas, el secuestro sistematizado, el robo de ganado, el robo y tráfico ilegal de gasolina, el uso y robo de regalías del petróleo, inversiones financieras en paraísos fiscales, inversiones en empresas legales, y hasta contribuciones voluntarias (en el caso de los paramilitares) (*El Tiempo*, 2001). El dinero es utilizado para sostener a los combatientes (alimento, uniformes, mesadas para sus familias), comprar armamento y equipos de comunicaciones en los mercados nacionales e internacionales, producir armamento casero y entrenar a los nuevos reclutas.

a) *El caso de las drogas ilícitas.* Sin querer desconocer la importancia económica, política y humanitaria del secuestro, es posible afirmar que la industria de drogas ilícitas ha sido la actividad más significativa en la economía de guerra ya que ha constituido cerca del 40% del presupuesto de las FARC y 70% del dinero de los paramilitares, (Rangel, 200; Rocha, 1999) y ha tenido impactos particulares sobre la capacidad de respuesta del estado. La industria de las drogas ilegales está vinculada al conflicto armado por cuatro vías:

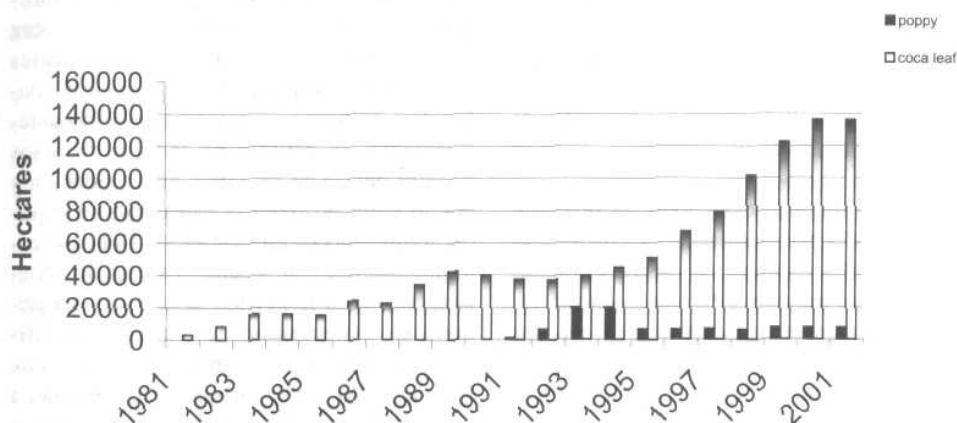
- i. Ha servido de base constante y predecible para las finanzas de las FARC y los paramilitares. No es coincidencia, por ejemplo, que el crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia haya sido directa-

se explica por una suerte de balance de poder entre las partes del conflicto, es decir, el hecho de que ningún lado ha sido lo suficientemente fuerte para ganar.

11 Aunque el fenómeno del narcotráfico ha sido estudiado extensamente durante las últimas dos décadas, falta aún afinar el análisis de cómo y cuándo inciden sobre las guerras civiles. Ross, por ejemplo, no hace ninguna referencia específica a estas microdinámicas en su estudio. Identificar dichas dinámicas de manera sistemática es crucial para la formulación de políticas preventivas y de manejo de conflictos.

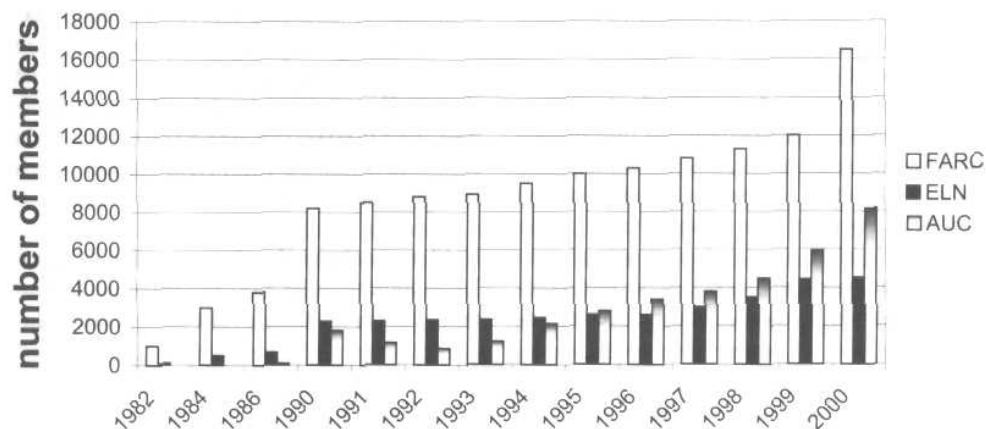
12 De cada barril producido, Colombia se queda con el 85% en regalías nacionales, regionales, otros impuestos y

Tabla 1: Colombia's Coca Leaf and Poppy Cultivation



Fuente: Departamento de Estado, International Narcotics Control Strategy Report, (Washington D.C., General Printing Office, varios años) y estadísticas de UNDCP, obtenidas en 2000.

Tabla 2: Illegal Armed Groups



Fuente: Dirección de Seguridad y Justicia, Departamento Nacional de Planeación, 2001.

mente proporcional al crecimiento de estos grupos armados (ver tablas 1 y 2).

- ii. Ha proporcionado a los grupos ilegales contactos con redes criminales regionales y transnacionales por medio de las cuales pueden acceder a los mercados negros y "grises" de armas y a las redes de lavado de dinero,
- iii. Ha debilitado la capacidad de reacción del estado por medio de la corrupción de oficiales públicos en cargos estratégicos e intimidación y ha hecho que el estado concentre su atención política, burocrática y jurídica en redes urbanas de narcotraficantes antes que en el conflicto armado, y
- iv. Ha permitido que los grupos armados ilegales tengan acceso a una base social (por medio de la cooptación política y económica o la intimidación) a través del control que ejercen sobre diferentes fases de la industria de las drogas ilegales".

Es indudable que los nuevos enfoques sobre la economía de los conflictos internos han llevado a enfatizar, en el caso colombiano, la relación que hay entre droga y conflicto y a entender exactamente qué impactos tienen los cultivos ilícitos y el narcotráfico sobre la duración, geografía e intensidad del conflicto. Por otro lado, también vale la pena preguntar qué le aporta el caso colombiano a las principales hipótesis que se han venido formulando frente a la relación entre re-

ursos naturales y conflicto armado. A primera vista, las estadísticas sobre la importancia de las drogas ilegales en la economía del conflicto colombiano parecieran confirmar la hipótesis de Collier y Hoeffler sobre la disponibilidad de recursos naturales saqueables y la duración de las guerras civiles. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, su estudio no incluye recursos ilegales dentro de las cifras de exportación y por lo tanto no tiene la capacidad de explicar lo que sucede en Colombia. Del caso colombiano, pues, se pueden extraer dos conclusiones para la agenda académica. La primera es la necesidad de teorizar específicamente sobre la relación drogas y conflicto. No todos los países productores de materia prima para drogas ilegales se convierten en zonas de conflicto, pero existen suficientes casos críticos (Afghanistan, Colombia, Myanmar y Perú) que validan la importancia de dicho ejercicio. Las drogas, además, tienen una característica bastante particular que las hace un recurso natural atípico y apetecido por los grupos armados: ser ilegales. La segunda conclusión es que *Greed and Grievance* puede estar apuntando a una relación de dependencia de recursos naturales y conflicto, que se refiere más bien a los efectos que tiene el (bajo) grado de desarrollo económico y la (baja) capacidad administrativa del estado sobre la (alta) incidencia y (mayor) duración de los conflictos armados.

b) *El caso del petróleo*. La extracción de petróleo y minerales ha sido frecuentemente asociada con protestas y conflictos sociales cau-

remesas.

- 13 La financiación de los Tamiles en Sri Lanka no ha estado relacionada con recursos naturales, sino con los aportes de la diáspora. La existencia de la mayoría de los grupos rebeldes de Myanmar ha dependido de la economía informal. En Kosovo, la economía informal que surgió en los noventa como respuesta a la exclusión de los albaneses por parte

sados por el deterioro económico a raíz de la llamada "enfermedad holandesa", protestas que involucran las comunidades donde operan las empresas, la violación de derechos humanos por las fuerzas de seguridad del estado que buscan proteger las actividades de extracción, guerras civiles causadas o exacerbadas por los efectos ambientales y disputas sobre la distribución de regalías, altos grados de corrupción estatal y, finalmente, con regímenes autoritarios que tienden a incrementar sus gastos de defensa con dinero de regalías a expensas de la inversión social como lo ejemplifican Angola, Myanmar, Indonesia, Nigeria y Sudan. (Bergensen, Haugland y Lunde, 2000; Karl, 1998; Swanson, 2002). Sin embargo, en el caso colombiano, los estudios sobre el conflicto armado rara vez analizaron de manera sistemática la relación entre petróleo y guerra, y a Colombia se le conocía más bien por sus problemas con el narcotráfico.

Recientemente el tema tomó relevancia a raíz del escrutinio de las finanzas del ELN, de la guerra entre éste y las FARC en Arauca en el 2001, y de la aprobación en Estados Unidos en 2002 de la ayuda adicional a Colombia por US\$98 millones para proteger la infraestructura petrolera en Arauca. Se hizo evidente, pues, que en Colombia también había una conexión entre petróleo y conflicto armado, confirmando las hipótesis sobre recursos naturales y guerras civiles. Sin embargo, la mecánica de dicha conexión es diferente a las tendencias en Angola, Nigeria y Sudan, y a la idea de que los recursos no saqueables, según Ross, rara vez benefician a grupos rebeldes. En Colombia, especialmente el ELN y más recientemente las FARC, se han lucrado del petróleo. Lo han hecho accediendo a las regalías departamentales y municipales por medio de la extorsión a empresas extractivas y sus contratistas. El ELN se benefició del des-

cubrimiento de petróleo en Caño Limón-Coveñas cuando la Mannesman Anlagenbau A.G. le pagó en 1984 entre \$2 y \$6 millones de dólares para garantizar que sus labores de construcción del oleoducto siguieran adelante sin hostigamientos. Este pago permitió la recuperación del ELN en los ochenta. Más impresionante aún, sin embargo, ha sido la forma como guerrilla y corrupción política se amalgamaron en Arauca para saquear las regalías. Este caso ilustra con claridad la mecánica de las estructuras de oportunidad legales e institucionales que permiten a los rebeldes acceder a fondos. El ELN aprendió a beneficiarse de las regalías petroleras usando la coerción sobre el proceso político y administrativo de inversión de las regalías desde la gobernación, las alcaldías, las asambleas municipales y las juntas de acción comunal. (Gómez y Schumater, 1998; Peñarete, 1991) Esto explica por qué los ataques perpetrados en contra del oleoducto Caño Limón-Coveñas nunca afectaron gravemente la producción de petróleo y el flujo de regalías, que ha sido de más de \$1.200 millones de dólares desde 1986 hasta el 2002 en Arauca. Fue sólo en el 2001, cuando las FARC entraron a disputar el control del ELN sobre la distribución de las regalías que los ataques se incrementaron dramáticamente hasta alcanzar 170 en ese año. (*Los Angeles Times*, 2002; *El País*, 2002). El objetivo de las FARC era cortar la fuente de dinero que alimentaba a su competencia en la zona.

Debido al régimen de regalías, el petróleo inevitablemente está asociado con las finanzas del estado central y, por ende, con el presupuesto de defensa. La producción de Colombia, sin embargo, es relativamente pequeña en términos mundiales y ha constituido en promedio 40% de las exportaciones tradicionales. No obstante, los impuestos a la producción petrolera representan un

región importante para el presupuesto del gobierno central¹². Por ello, y siguiendo el patrón en otras zonas de conflicto del mundo, se hubiera esperado que el estado colombiano centrara su atención militar y política sobre las zonas petroleras, para así garantizar el flujo de recursos y evitar que los grupos ilegales se beneficiaran de las regalías. Lo irónico es que siguió dejando en abandono a zonas apartadas como Arauca y Casanare, y no se quiso ver que los grupos armados ilegales se nutrían económica y socialmente de las regalías y que el progresivo fortalecimiento de la guerrilla implicaría mayores gastos en defensa. Fue sólo hasta 16 años después de que hubiera empezado la producción petrolera, y ya avanzado el conflicto interno, que el estado colombiano se preocupó por dichas zonas.

En el 2002, el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, bajo la premisa de que una de las formas de atacar los grupos armados ilegales es cortando sus finanzas y que los hidrocarburos constituyen un renglón vital de la economía nacional, incrementó sus esfuerzos militares y judiciales. El decreto 1990 del 23 de agosto de 2002 tipificó como delito el hurto de hidrocarburos y de sus derivados y establece cárcel de seis a doce años, además de una multa cuantiosa, a los que incurran en el delito. El decreto ha estado acompañado por una estrategia que surgió en diciembre de 2001 en la que fiscales y procuradores trabajan en equipo, con el apoyo logístico de unidades militares, en zonas de alto riesgo donde se cometen estos delitos. En el caso del petróleo, la estrategia ha logrado reducir los ataques de las FARC y el ELN al oleoducto Caño Limón-Coveñas (*Los Angeles Times*, 2002).

c) *Otros recursos de los grupo armados ilegales.*

La nueva literatura sobre las dimensiones económicas de los conflictos armados ha puesto un gran énfasis sobre los recursos naturales como fuentes de financiación de los grupos rebeldes y de combatientes estatales. Sin embargo, en el caso colombiano, el secuestro y la extorsión son tan o más importantes que los recursos naturales. Este tipo de financiación plantea la existencia de nuevos actores en la economía de los conflictos: las víctimas del secuestro y la extorsión y destapa una relación controversial entre víctimas y rebeldes, pues las víctimas de secuestro y extorsión son, desafortunadamente, las proveedoras del dinero que entra a los grupos armados ilegales. Esto, de alguna forma, le atribuye cierto tipo de responsabilidad a quienes cumplen con el pago. También se expone la existencia y responsabilidad de intermediarios en la transacción, como empresas aseguradoras nacionales e internacionales y bancos. Por esto la ONG holandesa Pax Christi ha sugerido fórmulas de no pago, especialmente por parte de las empresas privadas (Christi, 2002).

¿Qué significa en términos de las principales hipótesis sobre la financiación de los conflictos armados el hecho de que los recursos naturales no sean la única o más importante fuente de financiación de los grupos armados ilegales? En primer lugar, como se mencionó anteriormente, sugiere que la correlación entre recursos naturales y guerra, planteada por Collier y Hoeffler, puede referirse a fenómenos más allá de la simple conexión directa y mecánica que implica la apropiación de recursos naturales. Segundo, el caso colombiano muestra que hay

de los serbios corrompió una gran parte de la sociedad de Kosovo y le brindó el soporte económico a miembros del Ejército de Liberación de Kosovo para lanzar operaciones en Macedonia, dando origen a otro conflicto político

múltiples formas de financiación de los conflictos armados y que el origen y la duración de ciertos conflictos puede darse en lugares que no necesariamente poseen riquezas naturales¹³.

Las "verdaderas intenciones" de los grupos armados ilegales

En el caso colombiano hay pocas dudas sobre las motivaciones de carácter político y socioeconómico que dieron inicio al conflicto en los años sesenta. De forma breve: las guerrillas surgieron como una protesta contra la exclusión política y socioeconómica expresada a través de una propuesta armada de izquierda. Los detalles históricos y aspectos sociológicos han sido bien estudiados (Arango, 1984; Jaramillo Uribe, 1986; Leal Buitrago, 1984; Molano, 1987; Medina, 1996; Pizarro, 1996). Hay menor certidumbre, sin embargo, acerca de los móviles que mantuvieron a la guerrilla en la lucha armada en los ochenta y noventa y que aún sostienen a las guerrillas hoy en día. También ha habido fuertes dudas acerca de los verdaderos intereses de los paramilitares, que entraron a formar parte activa del conflicto armado a comienzos de la década de los ochenta. Dichas dudas tienen que ver con sus motivaciones: si son políticas o de lucro económico. Estos interrogantes se hicieron especialmente claros y explícitos tras los fracasados intentos del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) que tuvo claras demostraciones

de voluntad para realizar importantes cambios económicos y políticos en atención a los reclamos de las FARC. La zona de despeje de 40.000 km cuadrados en el Meta y la tolerancia al uso que este grupo armado hizo de esta zona son ejemplo de dicha voluntad. ¿Por qué las FARC no se desmovilizaron si el gobierno estaba dispuesto a reformar reglas políticas y económicas de juego? ¿Acaso no estaban interesadas en tales reformas y en la eventual pacificación del país? Por el otro lado, la participación de las FARC y de los paramilitares en la industria ilegal de drogas se había incrementado notablemente en los noventa, a tal punto que las primeras establecieron vínculos con carteles regionales y que los paramilitares estaban controlando corredores de tráfico en el Caribe e incluso puntos de distribución en Estados Unidos. ¿Eran las FARC y el ELN los mismos que hace dos décadas habían perdido su rumbo al verse cada vez más involucrados en actividades económicas ilegales como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión? Y ¿eran las AUC y otros paramilitares simples extensiones armadas del narcotráfico con disfraz político sacándole provecho a la guerra? Es decir, ¿eran las ganancias económicas originadas en la criminalidad lo que motivaba a los grupos armados ilegales, en lugar de una causa político-ideológica?

En cuanto a la guerrilla había al menos dos posibilidades que podían explicar un posible cambio de rumbo hacia la criminalización. Una era el cambio de preferencias,

étnico en esa región.

14 Esta es la apreciación de la mayoría de expertos académicos y de personajes involucrados en las negociaciones.

pues cuando las guerras llevan varios años e incluso décadas, los combatientes pueden cambiar sus intereses. El hecho de que las guerras requieran fondos significa que algunos o todos los combatientes tienen que dedicar parte de su tiempo a conseguir dinero o bienes de valor que puedan ser canjeados por armas. La participación sistemática y sostenida en el tiempo en actividades económicas legales e ilegales progresivamente "institucionalizan" dichas prácticas y con dicha institucionalización se tejen y cimientan nuevos intereses. Es por esto que algunos combatientes terminan enfocados en las actividades económicas como si fueran fines en sí mismos e incluso optan por el lucro individual -una suerte de corrupción de la causa rebelde-. Una segunda posibilidad de cambio podría surgir a raíz de los problemas de cooptación durante períodos de rápido crecimiento. De este modo, era probable que las FARC y el ELN hubieran empezado a cambiar de identidad, especialmente desde mediados de los noventa, cuando se aceleró el reclutamiento y que los nuevos reclutas no hubieran alcanzado a asimilar y afianzar el discurso guerrillero, y que sus motivaciones estuvieran más bien ligadas a las oportunidades económicas que les brindaba estar armados y respaldados por una organización militarizada con importante control territorial.

A pesar de estas posibilidades, se afirma que la identidad fundamental de las guerrillas parece no haber cambiado, aún¹⁴. A pesar de la maquinaria económica desarrollada por las FARC y el ELN, los líderes de dichos grupos continúan aferrados a sus ideas marxista adaptadas a los problemas de Colom-

bia. No obstante, su capacidad financiera sí ha influido en sus preferencias con respecto a si acoger un cese al fuego o no, negociar en un proceso de paz o no, y qué áreas geográficas del país ocupar entre aquellas ricas en coca, recursos mineros y energéticos. En conclusión, las "verdaderas intenciones" de los guerrilleros siguen siendo, en términos generales, las mismas a pesar de las nuevas dinámicas en la economía de guerra. El objetivo es doblegar al estado colombiano para impulsar su propio modelo político y económico. Las tácticas y estrategias militares y los detalles del juego político de la negociación han cambiado.

En cuanto a los paramilitares, la pregunta que surgió era si había tenido lugar o no una transformación en el sentido contrario. Es decir, se partía de que los paramilitares estaban íntimamente ligados al narcotráfico. Sin embargo se buscaba establecer si su verdadera razón de ser era, como lo declaraban en público, repeler la amenaza guerrillera, o si ésta era una excusa para seguir lucrándose del narcotráfico y de otras actividades como el robo de gasolina, para continuar apropiándose de tierras y para tejer una red de soporte político que legitimara sus actividades económicas. Curiosamente, en el caso de los paramilitares, también existía la posibilidad de una transformación de alguna forma inversa a la de los guerrilleros: que hubieran pasado de estrechos vínculos con el narcotráfico a redefinir su identidad y convertirse en un movimiento con programa esencialmente político. Esta redefinición, además los llevaría a replantear su posición y práctica frente al narcotráfico. Hasta la fecha, y con la fragmentación de los grupos paramilitares,

no es claro cuáles con sus objetivos. No obstante, es posible afirmar que dentro de la dinámica del conflicto, que incluye el crecimiento de los grupos paramilitares y su evolución, ha surgido un mayor reconocimiento político por parte de los gobiernos de Pastrana y Uribe, de su identidad como actores legítimos del conflicto y no como narcotraficantes o criminales.

Por último ¿qué aportes hace el caso colombiano al debate teórico en cuanto el tema de las dimensiones económicas de los conflictos y las motivaciones de los grupos armados ilegales? El caso colombiano muestra que la racionalidad económica de financiación de los rebeldes no implica la inexistencia de agravios que motivan la rebelión, la cual a su vez se basa en metas políticas.

Los recursos del estado colombiano y la ayuda de los Estados Unidos

Se ha planteado que los recortes de financiación por parte de Estados Unidos y la ex Unión Soviética, como resultado del fin de la Guerra Fría, influyeron radicalmente en la transformación de la economía política de los conflictos internos: no habiendo subsidios externos, los combatientes, bien sean estados o grupos armados ilegales, se vieron obligados a buscar métodos de autofinanciación, lo que empujó a los grupos a la depredación interna y a forjar alianzas con grupos criminales involucrados en actividades económicas ilícitas. Colombia, sin embargo, presentó un patrón particular. Primero, tanto el estado como los grupos armados ilegales tuvieron poca financiación (en términos comparativos mundiales) de padrinos externos durante la Guerra Fría; segundo, Estados Unidos comenzó, lentamente, a apoyar la guerra contrainsurgente del estado colom-

biano casi un lustro después de terminada la Guerra Fría gracias a la fuerte institucionalización de su misión antidrogas.

Después de una breve temporada de ayuda contrainsurgente en el marco de la Alianza para el Progreso, y a pesar de que la guerrilla no se había acabado en Colombia, Estados Unidos resolvió mantener una "distancia prudente" y no entrometerse en los asuntos internos del país, bien sea por la vía militar o haciendo uso de la diplomacia coercitiva. Curiosamente, fue el tema de las drogas y no el de la guerrilla, el que progresivamente acortó dicha distancia y le hizo zancadilla a la prudencia (Guáqueta, 2002). Estados Unidos desembolsó una primera y pequeña ayuda antinarcóticos en 1971. Año tras año, las iniciativas de cooperación bilateral crecieron. Finalmente, la agenda bilateral antidrogas se institucionalizó y expandió con el Andean Strategy de George Bush (1989) y con el llamado del presidente Virgilio Barco a Estados Unidos y a la comunidad internacional para que incrementaran su ayuda en la lucha contra el narcotráfico (1990). Al interior de Colombia y los Estados Unidos se crearon importantes burocracias antidrogas que aseguraron la sobrevivencia política del tema y la continuidad de la participación de Estados Unidos en Colombia. Ni siquiera la riña diplomática entre los gobiernos de Bill Clinton y Ernesto Samper entre 1995 y 1997 frenaron la misión antidrogas, que para ese entonces ya abarcaba una larga lista de temas, desde erradicación aérea hasta la transformación del sistema judicial colombiano y el incremento comercial a través del Andean Trade Preferente Act (ATPA). La lucha antidrogas se había convertido en el marco de referencia que direccionaba los temas políticos, económicos y legales de la relación y la razón por la cual, ahora, Estados Unidos se hallaba de cabeza involucrada en

el corazón de los debates políticos de Colombia. Con la agudización del conflicto colombiano y la creciente relación entre drogas y finanzas de los grupos armados ilegales, la participación de Estados Unidos en el tema del conflicto armado se dio como una extensión natural de su misión en el país. La decisión de la administración Clinton, en 1997, de incrementar la ayuda militar a Colombia y crear tres batallones antinarcóticos, a pesar de la crisis diplomática y la decertificación de ese año, comenzaba reflejar el cambio en las relaciones entre los dos países en lo que concernía al conflicto armado. Dicho cambio se formalizó con la aprobación, en 1999, en el Congreso de los Estados Unidos de US\$1.3 billones para el Plan Colombia. Para Estados Unidos el objetivo del plan era ayudar a las Fuerzas Armadas, a la Policía y en general al estado, a combatir el narcotráfico por medio de interdicción militar y erradicación principalmente, en el entendido de que la producción y el tráfico de drogas eran factores causantes y agravantes del conflicto. Esta misma lógica sustentó las aprobaciones de ayuda del Andean Regional Initiative en el 2001 y el 2002 durante la administración de George W. Bush en Estados Unidos y Andrés Pastrana y Alvaro Uribe en Colombia (Storrs y Serafino, 2002) para la lucha antinarcóticos y seguridad de US \$243,500,000 y para desarrollo económico y social US \$137,000. Finalmente, en el 2002, Estados Unidos aprobó ayuda militar suplementaria específicamente para contrainsurgencia y la protección a la infraestructura petrolera en Arauca, en lugar de operaciones en el marco de la guerra en contra de las drogas.

La ayuda a las Fuerzas Armadas y al estado colombiano ha sido una parte importante en la ecuación del conflicto e indudablemente ha contribuido a la sobrevivencia del

estado. Los críticos del papel de Estados Unidos argumentan que los recursos de su país solo han contribuido a extender y escalar el conflicto y que le han dado la opción al estado colombiano de no sentarse en la mesa de negociación si, a su juicio, no considera que los grupos armados están cumpliendo con actos relevantes de buena fe. En otras palabras, de no haber respaldo económico y político de los Estados Unidos, el gobierno colombiano hubiera tenido que dar fin al conflicto sentándose a negociar con los grupos armados de acuerdo con sus términos. Para los que piensan que las guerrillas tienen motivaciones políticas y socioeconómicas legítimas para rebelarse, y que el estado ha sido causante de los agravios a la población a quien la guerrilla dice representar, este es un escenario ideal para la terminación del conflicto.

En suma, el papel de Estados Unidos en Colombia demuestra que los días de injerencias internacionales no ha terminado y que la política exterior que guía dicha participación en el conflicto es el resultado de múltiples intereses políticos, burocráticos y privados, tal como lo preveerían las principales teorías de análisis de política exterior.

REFLEXIÓN FINAL: ALGUNAS IMPLICACIONES GENERALES EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS

La introducción de estas herramientas analíticas sobre los conflictos, que enfatizan ciertas dimensiones económicas de las guerras, ha tenido implicaciones concretas sobre la forma como los estados y los organismos internacionales han venido respondiendo a los conflictos armados. Primero, sugiere que éstos son negociables sólo cuando una de las

partes deja de lucrarse por medio del conflicto (cuando las ganancias individuales son la motivación principal de los combatientes) o, posiblemente, cuando una de las partes pierde capacidad económica para financiar su lucha. Para el caso colombiano esto significa que una negociación será solo posible cuando alguna de las partes se vea sustancialmente debilitada.

Segundo, esta lógica le ha dado nueva vigencia y sustento a las políticas antidrogas de los Estados Unidos e influido en la formulación de la nueva guerra en contra del terrorismo internacional, la cual tiene como componente fundamental cortar la red de financiación de los supuestos terroristas.

Tercero, Colombia ha dado un giro en las estrategias de lucha contra los grupos rebeldes. Ahora, la ofensiva militar está acompañada por un ataque a la base financiera de los grupos armados ilegales. Por ello, se han tipificado nuevos delitos y creado mecanismos por parte de las Fuerzas Armadas y de otros organismos como la Fiscalía, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Dirección de Policía Judicial e Investigación (Dijin). Desde 1996 se creó en el Ministerio de Defensa la Comisión Interinstitucional de las Finanzas de la Guerrilla. Como se mencionó anteriormente, el decreto 1990 del 23 de agosto de 2002 busca proteger la infraestructura energética bajo la premisa de que los grupos se lucraban de ella y era fundamental para las finanzas del estado.

Finalmente, este nuevo enfoque del análisis de los conflictos armados tiene implicaciones sobre que legitimidad y la opción o no de buscar métodos de resolución basados en compromisos negociados. Si el diagnóstico de un conflicto atribuye sus causas a agravios políticos y económicos legítimos,

las políticas de resolución tenderán a incluir compromisos que le den reconocimiento político a la parte discriminada; si se diagnostica que los rebeldes no son más que mercenarios en busca de lucro, disfrazados de víctimas sociopolíticas, habrá razones para legitimar un enfrentamiento militar y judicial en contra de los supuestos bandoleros, y los programas destinados al mejoramiento de la administración política democrática y al impulso del desarrollo económico se considerarán irrelevantes. Es por esto que la aplicación de esta tendencia analítica es tan controversial en Colombia, pues si se concluye que la única motivación de las guerrillas y de los paramilitares es enriquecerse por medio de la guerra, se descartaría la legitimidad de un proceso de paz.

BIBLIOGRAFÍA

- Collier, Paul, *Economic Causes of Civil Conflict and the Implications for Policy*, <http://www.worldbank.org/research/conflict/papers/greedandgrievance.htm>. 2000.
- El Tiempo, "El 8000 de los paras", octubre 21, 2001.
- Fafo Institute for Applied Social Science, Programme for International Cooperation and Conflict Resolution (PICCR). <http://www.fafo.no/piccr/econ.htm>.
- Gates, Scott, "Recruitment and Allegiance: The Micro Foundations of Rebellion", econ.worldbank.org/files/3106GatesMicrofoundations.pdf.
- Guáqueta, Alexandra, *Economic Agendas in Civil Wars: Case Study Findings*, New York: IPA, 2002.
- Guáqueta, Alexandra, *Continuity and Change in US-Colombian Relations 1970-1998*, Tesis Doctoral: University of Oxford, 2002.
- Gutiérrez Sanín, Francisco, "Inequidad y violencia política: una precisión sobre las cuentas y los cuentos", *Análisis Político* 43, mayo-agosto, 2001.

- Herbst, Jeffrey, "Economic Incentives, Natural Resources, and Conflict in Africa", *Journal of African Economies*, 9/3 October 2000.
- Herbst, Jeffrey, "Water and International Conflict", *Third World Quarterly*, 21/1 2000.
- Holsti, Kalevi, *The State, War and the State of War*. New York: Cambridge University.
- Ignatieff, Michael, *Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism*, London: Chatto & Windus, 1993.
- Kaldor, Mary, *New & Old Wars. Organized Violence in a Global Era*. Cambridge: Polity Press, 1999.
- Kaplan, Robert, *Balkan Ghosts*, London: Macmillan, 1993.
- Karl, Terry Lyn, *The Paradox of Plenty*, Berkeley: California University Press, 1998.
- Keen, David, "Incentives and Disincentives for Violence", en Mats Berdal y David Malone. *Greed and Grievance. Economic Agendas in Civil Wars*, Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 2000.
- Keen, David, *The Economic Functions of Violence in Civil Wars*, Londres: Oxford University Press, 1998.
- Klare, Michael and David Andersen, *A Scourge of Guns. The Diffusion of Small Arms and Light Weapons in Latin America*, Washington, D.C.: The Federation of American Scientists, 1996.
- Lichbach, M., "An Evaluation of Does Inequality Breed Political Conflict Studies", *World Politics* 41/4, 1989.
- Naciones Unidas, Global Compact, en: http://65.214.34.30/un/gc/unweb.nsf/content/zones_conflict.htm.
- Ole Bergesen, Helge Torleif Haugland and Leiv Lunde, "Petro-states. Predatory or Developmental?", *CEPLMP Internet Journal*, 7/20a, agosto, www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/welcome.htm. 2000.
- Rangel, Alfredo, "Parasites and Predators: Guerrillas and the Insurrection Economy", *Journal of International Affairs*, 53/2, 2000.
- Rocha, Ricardo, *La economía colombiana y la producción de drogas ilícitas: tras 25 años de inserción*, UNDP, 1999.
- Ross, Michael, "The Role of Natural Resources in Civil Wars", *IPA Policy Forum*, Nueva York, 2001.
- Ross, Michael, *How Do Natural Resources Vary in Their Impact on Civil Wars*, Nueva York, 2001.
- Stewart, Francés, "Horizontal Inequalities as a Source of Conflict", en: Fen Osler Hampson y David M. Malone (eds.), *From Reaction to Prevention: Opportunities for the UN System*. London: Lynne Rienner Publishers, 2002.
- Storrs, K. Larry y Nina Serafino, *Andean Regional Initiative (ARI): FY2002 Assistance for Colombia and Neighbors*, Congressional Research Service (CRS). Report for Congress. Washington, DC: CRS, February 14, 2002.
- Swanson, Philip, *Fuelling Conflict. The OH Industry and Armed Conflict*. Fafo report programa Economies of Conflict: Private, 2000.